



Medellín, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

EJECUTANTE:	Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.
EJECUTADA:	Carlos Julio Niño Lozano
TIPO DE PROCESO	Ejecutivo Laboral
DECISIÓN:	Confirmar auto
RADICADO Y LINK:	050013105-010-2021-00236-01 (044) 05001310501020210023601

En la ciudad de Medellín, a los diecisiete (17) días de marzo de dos mil veintitrés (2023), la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas Luz Amparo Gómez Aristizábal, María Eugenia Gómez Velásquez y Claudia Angélica Martínez Castillo como ponente, se reunió para resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte ejecutante contra el auto proferido el 7 de febrero de 2023, mediante el cual el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín declaró probada parcialmente la excepción de prescripción.

La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

I.ANTECEDENTES

PRETENSIONES

La ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. presentó demanda ejecutiva laboral, en contra de CARLOS JULIO NIÑO LOZANO, con el fin de que se librara mandamiento de pago por la suma de \$17.717.677 pesos, por concepto de capital de la obligación a cargo del empleador por los aportes en Pensión Obligatoria, más los Intereses de Mora por valor de \$43.014.200 pesos, que consta en el título ejecutivo N.º 11641-21, fechado junio 3 de 2021.

Valores adeudados a la fecha noviembre de 2020, fecha en que efectuó el requerimiento por mora, y los intereses de mora que se causen hasta tanto se verifique el pago real y efectivo.

II. TRÁMITE PROCESAL

El Juez de conocimiento a través del auto fechado mayo 6 de 2022, libró mandamiento de pago contra del ejecutado por los siguientes conceptos:

- La suma de \$17.717.677 pesos por concepto de capital de la obligación.
- La suma de \$43.014.200 pesos por concepto de intereses de mora hasta el 29/01/2021.
- Los intereses de mora que se causen a partir del requerimiento pre jurídico hasta el pago efectuado en su totalidad.
- Costas y agencias en derecho. (Archivo 11 carpeta primera instancia).

La apoderada del ejecutado en fecha junio 7 de 2022 contestó la demanda, proponiendo como excepción de fondo la de prescripción de 3 años contemplada en el artículo 488 del CST y 151 del CPT en armonía con la Ley 100 de 1993 artículo 22, la Ley 1066 de 2006 artículo 4, Decreto – Ley 3115 de 1968 artículo 41, Decreto 1848 de 1969 art. 102.

Discriminando la fecha en que operó la prescripción de los aportes en mora requeridos para su pago por cada empleado relacionado en el Título de la siguiente manera:

- Empleado: ESTHER MEDINA PIMIENTO

Períodos correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013; y, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014.

Requerimiento para constituir en mora: febrero 1 de 2021 (Guía de envío N.º 0044891205013193), prescripción de los aportes anteriores al 22 de febrero de 2018.

- Empleado: BENITO FIGUEROA PORRAS

Períodos correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011; febrero, marzo, abril, mayo, junio,

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2013.

Requerimiento para constituir en mora: febrero 1 de 2021 (Guía de envío 0044891205013193), prescripción de los aportes anteriores al 22 de febrero de 2018.

- Empleado: RAMOS PALMERA

Períodos correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016; y, enero, febrero y marzo de 2017.

Requerimiento para constituir en mora: febrero 1 de 2021 (Guía de envío 0044891205013193), prescripción de los aportes anteriores al 22 de febrero de 2018. (Archivo 12 carpeta primera instancia).

Una vez descorrido el traslado de las excepciones, por auto de calendarización diciembre 19 de 2022 se fijó fecha para la audiencia pública el día 7 de febrero de 2023 para resolver las excepciones propuestas (Archivo 20 carpeta primera instancia).

El Juez de conocimiento, en audiencia pública para resolver la excepción de fecha febrero 7 de 2023 declaró probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta por la apoderada del ejecutado, fundamentando su decisión en que por tratarse de un cobro de aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, el término prescriptivo no es el de 3 años contemplado en la normatividad laboral, sino que en virtud del reciente precedente de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Laboral sentencia STL 3387-2020, el término prescriptivo es de 5 años contemplado en el Estatuto Tributario en el artículo 817 para las obligaciones fiscales.

Que el término reseñado para las entidades Administradoras de Pensiones para ejercer los trámites administrativos y la acción ejecutiva de cobro es el reseñado en los artículos 2.2.3.3.3 y siguientes del Decreto 1833 de 2016, que a su vez remite al literal H del Decreto 656 de 1994, normatividad que establece el término de las acciones de cobro a los 3 meses siguientes de a la fecha en la cual se incurrió en mora, y que a su vez señala la necesidad de efectuar requerimiento al empleador respecto a las obligaciones vencidas con un lapso de espera de 15 días, una vez agotado dicho lapso habilita a la Administradora de

Pensiones para efectuar la liquidación que presta mérito ejecutivo, tal como lo establece el art. 2.2.3.3.5 del Decreto 1833 de 2016.

Que en razón de que la parte ejecutante realizó el requerimiento previo el 20 de febrero de 2021 (fl. 3 Archivo 06 carpeta primera instancia), y constituyó el Título Ejecutivo N° 11641-21 de junio 3 de 2021, operó el fenómeno extintivo de la prescripción de manera parcial de las cotizaciones a pensiones en mora para cada trabajador así:

- MEDINA PORRAS(sic): por las cotizaciones causadas en los períodos de agosto 2011 y diciembre de 2014.
- FIGUEROA TORRES: por las cotizaciones causadas en los períodos de abril de 2006 a septiembre de 2013.
- RAMOS PALMERA: por las cotizaciones causadas en los períodos de agosto de 2011 a mayo de 2016.

Y en consecuencia ordena seguir adelante la ejecución únicamente por las cotizaciones en mora de los aportes en pensión del trabajador RAMOS PALMERA causadas a partir de junio de 2016 a marzo de 2017 que equivale a \$2.438.496 pesos, junto con los intereses de mora (Minuto 13:18 Audio).

Aunque la Sala se percató de que el acta de la audiencia de decisión de excepciones dentro del proceso de marras contiene un error de transcripción, dado que en el cuadro donde se registra los sujetos procesales se anotó como parte ejecutada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y como apoderada de la ejecutada la abogada LUZ MARINA ALARCÓN CUEVAS, siendo que el ejecutado es una persona natural CARLOS JULIO NIÑO LOZANO, y su apoderada la abogada Luz Marina Alarcón Cuevas, ella carece de incidencia porque en la parte resolutive sí se indicó de manera correcta los extremos de la Litis (Archivo 21 carpeta primera instancia).

III RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de la parte ejecutante manifiesta que los aportes reclamados en la demanda de la referencia no hacen parte de los aportes fiscales contemplado en el Estatuto Tributario como lo contempla el artículo 817 del mismo. Por lo que no procede la excepción parcial. (Minuto 23.36).

Encontrándose, que posteriormente y por escrito en fecha febrero 13 de 2023 la apoderada de Protección SA allega escrito sustentando el recurso de apelación con otros fundamentos (Archivo 23 carpeta primera instancia).

Al respecto debe advertirse a la parte apelante que en aplicación del numeral 1 del inciso segundo del artículo 65 del CPT, el recurso que es hoy objeto de estudio por esta Sala de

Decisión se limitará a los argumentos expuestos de manera oral en la audiencia que declaró la prescripción parcial. Y que en lo que respecta a la sustentación presentada por escrito calendado febrero 13 de 2023, no serán tenidos en cuenta para su decisión.

IV ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

CARLOS JULIO NIÑO LOZANO:

Manifestó el apoderado del ejecutado que el presente trámite fue promovido para obtener el pago de las cotizaciones entre mayo de 1997 a noviembre de 2005, tal como se desprende de los documentos que obran a folios 14 y siguientes del documento 01. Como quiera que entre la fecha de la causación de los aportes cobrados y la fecha en que se instauró el proceso ejecutivo, lo que ocurrió el 24 de febrero de 2021, en lo que se refiere a los afiliados MEDINA PIMIENTO y FIGUEROA PORRAS, transcurrieron más de los cinco años aplicables para este tipo de obligaciones, por lo que operó el fenómeno jurídico de la prescripción.

Frente al afiliado RAMOS PALMERA los períodos cobrados anteriores a enero de 2016 se encuentran igualmente afectados por la figura de la prescripción, al haber transcurrido más de los cinco años entre la fecha de causación de los aportes cobrados y la fecha de presentación de la demanda, que se reitera, ocurrió el 24 de febrero de 2021. En consecuencia, solicita se confirme la decisión proferida por el aquo y condenar en costas a la ejecutante.

Por lo que la Sala se plantea el presente Problema Jurídico:

¿Son susceptibles del fenómeno de prescripción extintiva los aportes pensionales en mora reclamados por la Administradora del Fondo de Pensiones?

V. CONSIDERACIONES

5.1. Procedencia o no de la prescripción de las acciones de cobro de las administradoras de pensiones para obtener el pago efectivo de las cotizaciones del empleador por los aportes en mora.

Para determinar si es procedente o no la declaratoria del fenómeno de la prescripción respecto de las acciones de cobro que las administradoras de pensiones realicen de las cotizaciones cuando el empleador incurra en mora tal como lo declaró el Juez de instancia, es oportuno tener en cuenta que la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema ha considerado que es carga

o deber de las administradoras de fondos de pensiones adelantar las acciones cobro de los aportes en mora del empleador, y ella debe cumplirse con diligencia y cuidado para tener efectos liberatorios. En efecto, en decisión CSJ SL, 28 oct. 2008, rad. 34270, se expuso:

[...] Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le señalan las normas, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del C.C., regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual.

Dentro de las obligaciones especiales que le asigna la ley a las administradoras de pensiones está el deber de cobro a los empleadores de aquellas cotizaciones que no han sido satisfechas oportunamente, porque a ellas les corresponde garantizar la efectividad de los derechos de los afiliados mediante acciones de cobro como lo dispone el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

Ello es así porque en aras de garantizar el sostenimiento del Sistema General de Seguridad Social la Ley 100 de 1993 consagró como obligaciones a cargo de los participantes del mismo, el pago de aportes a fin de lograr mantener el equilibrio financiero y su viabilidad a futuro.

Con respecto al riesgo de pensiones, existen unas obligaciones en favor del trabajador como lo es el pago de los aportes pensionales dentro de las fechas oportunas, generando en cabeza de la administradora que regenta la afiliación a pensiones, el compromiso de velar por el pago oportuno del aporte y en caso de incurrir mora, hacer uso de las acciones de cobro al momento de la mora y en el plazo determinado por la ley que las creó tal como lo establecen los artículos 17, 22 y 24 de la Ley 100 de 1993.

A su vez las Administradoras de los Fondos de Pensiones deben atender en forma estricta el procedimiento de cobro previsto en el Decreto 2633 de 1994:

Artículo 2°. Del procedimiento para constituir en mora al empleador. Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá, si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual presentará mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

Ahora, en la actualidad, la naturaleza parafiscal de las cotizaciones a pensión es un asunto pacífico que fue dirimido por la Corte Constitucional en aña sentencia C-155 de 2004, donde se señaló:

Esta Corporación de manera reiterada ha precisado en efecto que los recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud como en pensiones, llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o

bonificaciones, son en realidad contribuciones parafiscales de destinación específica, en cuanto constituyen un gravamen, fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones y que, al no comportar una contraprestación equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan también a la financiación global bien del Sistema General de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

Así las cosas, es justamente la naturaleza parafiscal de los mencionados aportes la que sirve de sustento para afirmar que, se debe acudir al artículo 817 del Estatuto Tributario, conforme con el cual la oportunidad que tiene la Administradora del Fondo de Pensiones para ejercer las acciones de contra el empleador moroso es de cinco (5) años, de ahí que, si transcurrido este lapso la administradora no las inicia, opera el fenómeno extintivo de la prescripción, contado a partir de la fecha de la presentación de la liquidación que constituyó el título de recaudo ejecutivo:

TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. <Artículo modificado por el artículo 53 de la Ley 1739 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Nacional, para las declaraciones presentadas oportunamente.
2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea. (...)

La trascendencia de instaurar oportunamente las acciones tendientes a obtener el pago en mora de las cotizaciones a pensión a los empleadores ha sido examinada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en varias oportunidades, en la sentencia SL797-2022, la corporación recordó que la desidia de las administradoras no puede afectar el derecho del trabajador quien se encuentra en construcción de su derecho pensional:

Conforme a lo señalado, es dable colegir, que efectivamente cuando se registran periodos en mora por parte de algún empleador, le corresponde a la entidad de seguridad social ejercer las acciones de cobro y si no lo hace, esa inactividad no puede perjudicar los derechos sociales del trabajador, por ende, deben ser contabilizados para efectos pensionales, siempre que se demuestre que «en ese lapso existió un contrato de trabajo, o en otros términos, que aquel [empleador] estaba obligado a efectuar dichas cotizaciones porque el trabajador prestó servicios en ese período».

Por lo tanto, la administradora no puede beneficiarse de su propia negligencia, amparada en que mientras el derecho al reconocimiento de la pensión se encuentra en construcción, las acciones de cobro de los aportes que el empleador tenga en mora son imprescriptibles. Ello es así porque la situación tiene distintas consecuencias de acuerdo con la arista de la cual se analice; así, al tenor de lo previsto en el artículo 48 de la Carta Política, es predicable la imprescriptibilidad de los aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones, cuando el derecho pensional esté formación y quien ejerza la acción sea el trabajador o afiliado; mientras que, cuando lo haga la Administradora del Fondo de Pensiones, es posible

declarar la prescripción de la acción de cobro ejercida por fuera de los plazos legales y endilgarle a aquella las consecuencias de su propia inactividad conforme se explicó antes.

El tema fue examinado por la Sala de Casación Laboral, en las sentencias STL 3387 y 3413 de 2020, en la primera de las mencionadas, en sede de tutela analizó el caso de un empleador que aducía la violación del debido proceso inmersa en la sentencia judicial que se abstuvo de declarar la prescripción de la acción de cobro, amparada en la concepción de que eran imprescriptibles, traemos aquí las reflexiones de aquel proceso dada la similitud fáctica y jurídica con el que en esta providencia se resuelve:

(...) a través del proceso identificado con radicado «50001310500320170041501», la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías – PORVENIR SA-, pretende el cobro ejecutivo de los aportes obligatorios para el sistema general de pensiones dejados de cotizar por el empleador Clean Service Colombia SAS, a nombre de varios de sus empleados, aportes que según la demanda abarcan periodos desde el año de 1997 hasta el 2017.

Analizado lo expuesto por el Tribunal censurado, advierte la Sala que le asiste razón a la parte actora en cuanto a los cuestionamientos endilgados al trámite surtido al interior del proceso ejecutivo laboral de la referencia, pues resulta innegable la trasgresión de las prerrogativas superiores de aquella, respecto de la prescripción de la acción ejecutiva de los aportes obligatorios dejados de consignar por el empleador al sistema general de pensiones, como como pasará a exponerse.

Es necesario separar jurídicamente el vínculo entre el empleador y la administradora de fondos de pensiones, y la relación entre esta última y el trabajador, puntualizando, que en el sub examine, nos encontramos frente a la primera circunstancia.

Precisado lo anterior, es pertinente indicar, que el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, establece como una obligación del patrono descontar los aportes del trabajador a la seguridad social del sueldo de cada mes, los cuales, -adicionados a los aportes patronales- deberán trasladarse a la Entidad Administradora de Pensiones. Esto significa entonces, que durante ese período, la entidad administradora de pensiones debe haber recibido y registrado en su sistema los aportes que mes a mes le debieron trasladar los empleadores, con base en las afiliaciones respectivas y durante la vigencia de su vínculo laboral. Al no ocurrir así, es decir, al presentarse una mora patronal, el Fondo debe proceder a cobrar las cotizaciones pendientes, inclusive, coactivamente.

En esa misma línea, el artículo 24 ibídem preceptúa, que *«corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo»*.

Bajo ese entendido, ante el incumplimiento del empleador, la Ley autorizó a las AFP para iniciar las acciones de cobro o proceso ejecutivo, respaldadas en un «*título ejecutivo complejo*» que se compone de: (i) la correspondiente liquidación de lo adeudado que elabora el respectivo fondo de pensiones -liquidación que las más de las veces debe ser la misma que el fondo presente al empleador al momento de requerirlo-, y, (ii) la prueba de haberse hecho el respectivo requerimiento al empleador moroso.

Insiste la norma, en que la liquidación presta mérito ejecutivo, es decir, con vocación de cobrarse coactivamente una vez vencido los 15 días del requerimiento al empleador, lo que quiere decir que, mientras no se surta el requerimiento y se elabore la respectiva liquidación, no puede el Fondo de pensiones acudir a la administración de justicia para apremiar el pago de lo adeudado, porque sólo a partir de ese momento la obligación se vuelve exigible, tal y como acertadamente lo expuso la Colegiatura accionada.

Por su parte el Decreto 1161 de 1994, mediante el cual se dictaron normas en materia del Sistema General de Pensiones, estableció en su artículo 13 las acciones de cobro a favor de las entidades administradoras de los diferentes regímenes, precisando que:

Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes entablar contra los empleadores las acciones de cobro de las cotizaciones que se encuentren en mora así como de los intereses de mora a que haya lugar, pudiendo repetir contra los respectivos empleadores por los costos que haya demandado el trámite pertinente, en los términos señalados en el literal h) del artículo 14 del Decreto 656 de 1994.

Estas acciones deberán iniciarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la cual se entró en mora. Lo anterior es aplicable inclusive a las administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, las cuales podrán iniciar los correspondientes procesos coactivos para hacer efectivos sus créditos de conformidad con el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6º de 1992 y demás normas que los adicionen o reformen.

Parágrafo. *En aquellos casos en que sea pertinente, las administradoras deberán informar al Fondo de Solidaridad Pensional sobre las acciones de cobro que deban adelantarse, con el objeto de que éste, si lo estima pertinente y por conducto de su representante, tome participación en el correspondiente proceso.*

Ahora bien, con base en la normatividad referida, es innegable que el propósito del legislador no era el de dejar a discreción de las entidades administradoras de pensiones, el término para ejercer y adelantar la acción ejecutiva, como quiera que, primero, ello iría en contra de la misma eficiencia y cuidado que se exige a las administradoras en el manejo de los aportes pensionales, y, segundo, porque la incuria y negligencia de la administradora pondría en riesgo el sistema de seguridad social en pensiones, y eventualmente la misma pensión del trabajador.

Así las cosas, concluye esta Sala que la entidad administradora de pensiones, no puede hacer exigibles en cualquier tiempo, todos aquellos aportes que el empleador debió haber cotizado por efecto de las vinculaciones contractuales del afiliado durante toda su vida laboral, pues de aceptarse que la acción de cobro que debe adelantar la AFP frente al empleador moroso de los aportes al sistema general de pensiones, es de carácter imprescriptible, se desconocería la finalidad de las diferentes facultades de fiscalización, de control, acciones precoactivas y coactivas, otorgadas por el legislador a dichas entidades, a efectos de hacer efectivo el pago de los aportes por parte del patrono renuente.

Resulta relevante advertir, que no es el trabajador el que sufre las consecuencias de la prescripción de sus aportes, sino la entidad administradora de pensiones, quien debe responder con su propio patrimonio por todos y cada uno de los aportes que dejó de cobrar en tiempo con su correspondiente rendimiento, o dicho en otras palabras, que dejó prescribir por su incuria o negligencia, tal como lo prevé el inciso tercero del artículo 21 del Decreto 656 de 1994.

En concordancia con lo expuesto, al ser los aportes a la seguridad social, contribuciones parafiscales, para su cobro se debe aplicar el Estatuto Tributario, conforme al artículo 54 de la Ley 383 del 97, según el cual, las normas de procedimiento, sanciones, determinación, discusión y cobros contenidas en el libro quinto del Estatuto Tributario Nacional, serán aplicables a la administración y control de las contribuciones y los aportes inherentes a la nómina, tanto en el sector privado como en el público, establecidas en las leyes 58 del 63, 27 de 74, 21 del 82, 89 del 88 y 100 del 93.

Así las cosas, conforme al artículo 17 del Estatuto Tributario, que fue modificado por el artículo 53 de la Ley 1739, se establece que la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco años (énfasis añadido).

Con anterioridad el Consejo de Estado en sentencia CE SII E 1829 de 2017 se había referido al mismo asunto postulando por la prescriptibilidad de las acciones de cobro de las administradoras y precisando que esta no podría ejercerse en cualquier tiempo:

La Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues

aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales”

Colofón de los argumentos antes expuestos, tenemos que en el sub exámine, el Juez de instancia determinó que con respecto a la acción de cobro soportada en el título ejecutivo fechado junio 3 de 2021, operó la prescripción total con respecto al cobro de los aportes de pensión en mora por parte de la ejecutada con relación a los trabajadores Medina Pimiento por las cotizaciones causadas en los períodos de agosto 2011 y diciembre de 2014, y Figueroa Torres por las cotizaciones causadas en los períodos de abril de 2006 a septiembre de 2013.

Y de manera parcial decretó la prescripción de las cotizaciones causadas por el trabajador Ramos Palmera por los períodos de agosto de 2011 a mayo de 2016, ordenando seguir adelante la ejecución por las cotizaciones causadas entre el 3 de junio de 2016 y marzo de 2017, tal decisión se encuentra ajustada a la normatividad vigente que regula todo el procedimiento con respecto a las acciones de cobro, tales como la Ley 100 de 1993, Decreto 1161 de 1994, Decreto 692 de 1994 artículo 28, Ley 383 de 1997 artículo 54, modificado por la Ley 633 de 2000.

No así la prescripción de 3 años consagrada en la normatividad especial laboral en los artículos 488 CST y 151 del CPTSS, de conformidad con el precedente jurisprudencial traído a colación.

De tales premisas, antes expuestas concluye esta Corporación que en razón de que el requerimiento al ejecutado en su condición de empleador y directo obligado al pago de las cotizaciones en pensión de los trabajadores Medina Pimiento, Figueroa Porras y Ramos Palmera, solo se efectuó en febrero 20 de 2021 (FI 3 Archivo 06 carpeta primera instancia), procediendo a efectuar la pertinente liquidación de los aportes que constituyeron al ejecutado en mora hasta el día 3 de junio de 2021, como consta en el Título Ejecutivo 11641-21 (fl. 1 Archivo 06 carpeta primera instancia), al efectuar el respectivo cálculo hacia atrás para contabilizar el término de 5 años de prescripción extintiva, no existía otro criterio a aplicar sino que los aportes cobrados por esta vía ejecutiva habían sido afectados por la prescripción.

Siendo oportuno únicamente seguir adelante la ejecución de manera parcial por los aportes del empleador RAMOS PALMERA, en mora del período comprendido entre el mes de junio de 2016 hasta el mes de marzo de 2017, por valor \$2.438.496 más los intereses de mora causados desde el momento en que se hizo exigible la obligación hasta su pago efectivo, tal y como lo declaró el Juez de Instancia.

Así las cosas, y en razón a que dentro del sumario quedó plenamente demostrada que el requerimiento tardío de la ejecutante en su condición de Administradora del Fondo de Pensiones, y que se insiste los conceptos en mora corresponden a obligaciones de tipos parafiscales como quedó decantado en la parte motiva de esta providencia, que esta Corporación considera que hay lugar a confirmar la decisión objeto de alzada.

Por lo que la decisión objeto de alzada se CONFIRMA.

Con COSTAS PROCESALES de 2ª instancia a cargo del ejecutante en la suma de \$580.000 pesos.

En mérito de lo expuesto, la SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

VI. DECIDE:

PRIMERO: Confirmar el auto fechado febrero 7 de 2023, proferido por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ejecutivo laboral promovido por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. en contra de CARLOS JULIO NIÑO LOZANO, de conformidad con los argumentos antes expuestos.

SEGUNDO: Con costas procesales de 2ª instancia a cargo del ejecutante en la suma de \$580.000 pesos.

Lo resuelto se notifica en ESTADOS.

Las Magistradas


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE
CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 048
del 21 de marzo de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>